
Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes
Gobernador del Estado

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA H. LX LEGISLATURA DEL ESTADO

MIGUEL ALEJANDRO ALONSO REYES, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción II del artículo 60 de la Constitución Política del Estado, vengo a promover ante esa H. Legislatura, INICIATIVA POR LA QUE SE QUE EXPIDE LA LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE ZACATECAS Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o mas personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia.

Ahora bien, el 7 de noviembre de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, que en su artículo 2º establece que cuando tres o mas personas se organizan de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionados por ese solo hecho como miembros de la delincuencia organizada.

Los delitos a que se refiere dicho dispositivo son los siguientes: terrorismo, contra la salud, falsificación o alteración de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, corrupción de personas menores de edad, pornografía de menores de edad, turismo sexual, lenocinio, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.

Si bien es cierto que la fracción XXI del artículo 73 de nuestra Constitución General establece que las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común cuando estos tengan conexidad con delitos

federales, también lo es que en el caso de los delitos del fuero común cometidos por la delincuencia organizada, solo conocerá el Ministerio Público de la Federación cuando ejerza la mencionada facultad de atracción, de conformidad con lo que establece el segundo párrafo del artículo 3º de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Así las cosas, si el Ministerio Público de la Federación no ejerce la multicitada facultad de atracción, es obligación ineludible de las autoridades locales investigar, perseguir, procesar y sancionar las conductas ilícitas que cometan las organizaciones delictivas en el ámbito local .

Por lo anterior, mas de una decena de Entidades Federativas y el Distrito Federal, han expedido sus respectivas leyes locales para combatir a la delincuencia organizada, toca ahora el turno a Zacatecas para lo cual sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa que, a nuestro juicio, será la mas avanzada del país puesto que recoge lo mejor de las existentes, perfecciona conceptos, supuestos y procedimientos e innova en algunos aspectos soslayados por la legislación federal, respetando siempre los estándares internacionales mas altos derivados de los tratados ratificados por México en materia de Derechos Humanos .

ESTRUCTURA LÓGICO JURÍDICA

La ley que se propone se conforma de seis títulos, el primero relativo a Disposiciones Generales, con un Capítulo Único sobre naturaleza, objeto y aplicación de la ley. El segundo se refiere a la Investigación de la Delincuencia Organizada y consta de siete Capítulos, a saber: el primero sobre las reglas generales para la investigación de la delincuencia organizada, el segundo sobre la detención y retención de indiciados, el tercero sobre la reserva de las actuaciones de investigación, el cuarto sobre las técnicas de investigación que requieren control judicial, el quinto sobre el aseguramiento y bienes susceptibles de decomiso, el sexto sobre la protección de personas, y el séptimo sobre la colaboración en la persecución de la delincuencia organizada.

El Título Tercero relativo a los Jueces Especializados se integra con un solo Capítulo, mientras que el Título Cuarto relativo a las Reglas Especiales para el Proceso, Prueba Anticipada y Valoración de Preuba contiene un Primer Capítulo sobre la preuba anticipada y otro mas sobre las reglas especiales para el proceso y valoración de la prueba.

El Título Quinto relativo a la Prisión Preventiva, Ejecución de las Penas y Medidas de Seguridad consta de un solo Capítulo, al igual que el Título Sexto relativ a la Responsabilidad Civil derivada de estos delitos.

Es de señalarse que la presente iniciativa también propone reformar diversas disposiciones del Código Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas a efecto de hacer acordes estos ordenamientos con las

disposiciones contenidas en la nueva Ley Contra la Delincuencia Organizada del Estado de Zacatecas.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta H. Legislatura del Estado la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE LA LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE ZACATECAS Y LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la **Ley Contra la Delincuencia Organizada del Estado de Zacatecas**, para quedar:

**TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES**

**CAPÍTULO ÚNICO
NATURALEZA, OBJETO Y APLICACIÓN DE LA LEY**

Artículo 1o.- La presente Ley tiene por objeto establecer reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por los delitos cometidos por personas pertenecientes a la delincuencia organizada. Sus disposiciones son de orden público y de aplicación en el Estado de Zacatecas.

Artículo 2o.- Se entenderá por delincuencia organizada a un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más de los delitos tipificados con arreglo a la presente Ley con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material.

Por grupo estructurado se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada.

Comete el delito de pertenencia a la delincuencia organizada aquella persona que se organice de hecho con dos o mas personas, para realizar en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tengan como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes:

I. Delitos contra el desarrollo de las personas menores de edad y la protección integral de personas que no tienen la capacidad para comprender el

significado del hecho previstos en el Primer Párrafo del artículo 181, el Tercer Párrafo del artículo 181 BIS y el artículo 183, todos ellos del Código Penal para el Estado de Zacatecas;

II. Asalto, previsto en el artículo 263 del Código Penal para el Estado de Zacatecas, cuando sea realizado en carreteras o caminos;

III. Secuestro Exprés, previsto en el artículo 265 BIS y Secuestro, previsto en el artículo 266, todos ellos del Código Penal para el Estado de Zacatecas;

IV. Trata de personas, previsto en el artículo 277 BIS del Código Penal para el Estado de Zacatecas;

V. Homicidio previsto en el artículo 293, en relación con los similares 299 y 301 del Código Penal para el Estado de Zacatecas, cuando este sea cometido por personas pertenecientes a la delincuencia organizada;

VI. Robo, previsto en los artículos 317 y 321 Fracción I del Código Penal para el Estado de Zacatecas, cuando se cometa en vehículos utilizados para el transporte de personas o mercancías;

VII. Robo, previsto en los artículos 317 y 321 Fracción VIII del Código Penal para el Estado de Zacatecas, cuando se trate del apoderamiento de vehículos;

VIII. Abigeato, previsto en el artículo 330 del Código Penal para el Estado de Zacatecas;

IX. Extorsión, previsto en el artículo 341 BIS del Código Penal para el Estado de Zacatecas, y

X. Operación con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 362 Bis del Código Penal para el Estado de Zacatecas.

Artículo 3o.- Los delitos a que se refieren las fracciones I a X del artículo anterior, que sean cometidos por persona perteneciente a la delincuencia organizada, serán investigados, perseguidos, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de esta Ley.

Artículo 4o.- Sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o delitos que se cometan, al que pertenezca a la delincuencia organizada se le aplicarán las penas siguientes:

I. A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión, de ocho a dieciséis años de prisión y de quinientos a veinticinco mil días multa, o

II. A quien no tenga las funciones anteriores, de cinco a diez años de prisión y de doscientos cincuenta a doce mil quinientos días multa.

En todos los casos a que este artículo se refiere, además, se decomisarán los objetos, instrumentos o productos del delito, o de sus equivalentes o mezclas de conformidad con el artículo 35 de la presente Ley, así como los bienes propiedad del sentenciado y aquéllos respecto de los cuales éste se conduzca como dueño, si no acredita la legítima procedencia de dichos bienes.

Artículo 5o.- Las penas a que se refiere el artículo anterior se aumentarán hasta en una mitad, cuando:

I. Se trate de cualquier servidor público o ex servidor que participe en la realización de los delitos previstos para la delincuencia organizada. Además, se impondrán al servidor público, destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión públicos, por un plazo igual al de la sentencia, o

II. Se utilice a niños, niñas o adolescentes o incapaces para cometer cualesquiera de los delitos a que se refiere esta Ley.

Artículo 6o.- Al que obstruya la investigación, persecución o proceso de las personas pertenecientes a la delincuencia organizada se le impondrán de ocho a dieciséis años de prisión y de diez mil a veinticinco mil días multa cuando:

I. Por medio del uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a falso testimonio u obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas en un proceso en relación con la comisión de uno o mas de los delitos a los que se refiere la presente Ley;

II. Por medio del uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario que tiene a su cargo impartir justicia o de los servicios encargados de la investigación o persecución del delito, en relación con la comisión de los delitos comprendidos en la presente Ley.

Artículo 7o.- Los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva y de la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad correspondientes, se duplicarán respecto de los delitos a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley cometidos por personas pertenecientes a la delincuencia organizada.

Artículo 8o.- Son aplicables supletoriamente a esta Ley, las disposiciones del Código Penal para el Estado de Zacatecas, Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas y Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Restrictivas de la Libertad, así como las comprendidas en leyes especiales.

TÍTULO SEGUNDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

CAPÍTULO PRIMERO DE LAS REGLAS GENERALES PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Artículo 9o.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas contará con una Unidad Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada, la que tendrá a su cargo la investigación y persecución de delitos cometidos por personas pertenecientes de la delincuencia organizada, integrada por agentes del Ministerio Público, auxiliados por agentes de la Policía Ministerial o de otras instituciones policiales, peritos y demás personal especializado y administrativo que determine su reglamento.

La unidad especializada contará con un cuerpo técnico de control, que en las intervenciones de comunicaciones privadas verificará la autenticidad de sus resultados; establecerá lineamientos sobre las características de los aparatos, equipos y sistemas a autorizar; así como sobre la guarda, conservación, mantenimiento y uso de los mismos.

El Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Zacatecas, establecerá los perfiles y requisitos que deberán satisfacer los servidores públicos que conformen a la unidad especializada, para asegurar un alto nivel profesional de acuerdo a las atribuciones que les confiere esta Ley.

Siempre que en esta Ley se mencione al Ministerio Público, se entenderá que se refiere a aquéllos que pertenecen a la unidad especializada que este artículo establece.

En caso necesario, el titular de esta unidad podrá solicitar la colaboración de otras dependencias de la Administración Pública Estatal, Federal o de otras entidades federativas.

Artículo 10.- El Gobierno del Estado de Zacatecas contará con una Unidad de Investigación Patrimonial de la Delincuencia Organizada para la investigación del patrimonio de las personas pertenecientes a la delincuencia organizada. Esta Unidad tendrá por objeto garantizar el intercambio, generación y consolidación de información fiscal, financiera y patrimonial para la investigación, persecución, procesamiento y sanción en tratándose de delitos relacionados con delincuencia organizada.

Las instituciones de gobierno relacionadas, designarán enlaces para integrar el grupo de trabajo con la Unidad a la que se refiere el presente artículo, quienes deberán tener facultades amplias para coadyuvar de forma inmediata en las investigaciones. Los enlaces así designados deberán manejar la información que conozcan con motivo de su encargo bajo la mas estricta confidencialidad. El Titular de la Unidad podrá solicitar que se designen enlaces

temporales de cualquier dependencia u organismo del Gobierno del Estado para contribuir al desarrollo de sus funciones.

Los servidores públicos que integren o participen en la Unidad a la que se refiere el presente artículo deberán sujetarse a un proceso de control de confianza y deberán ser certificados.

Las investigaciones que lleve a cabo la Unidad de Investigación Patrimonial se deberán realizar en coordinación con la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas o con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según sea el caso.

Los requerimientos del Ministerio Público, o de la autoridad judicial, de información o documentos relativos al sistema bancario y financiero, se harán por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, según corresponda. Los de naturaleza fiscal, a través de la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas.

La información que se obtenga conforme al párrafo anterior, podrá ser utilizada exclusivamente en la investigación o en el proceso penal correspondiente, debiéndose guardar la más estricta confidencialidad. Al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, según corresponda.

Artículo 11.- A solicitud de la Unidad de Investigación Patrimonial de la Delincuencia Organizada, la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas, podrá realizar auditorías a personas físicas o morales, cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que son pertenecientes a la delincuencia organizada.

Artículo 12.- En las investigaciones relativas a los delitos a que se refiere esta Ley, la investigación también deberá abarcar el conocimiento de las estructuras de organización, formas de operación, ámbitos de actuación y zonas geográficas de operación. Para tal efecto, el Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas podrá autorizar la infiltración de agentes.

En estos casos se investigará no sólo a las personas físicas que pertenezcan a esta organización, sino las personas morales de las que se valgan para la realización de sus fines delictivos.

Artículo 13.- El Titular del órgano previsto en el artículo 9 podrá autorizar la reserva de la identidad de los agentes de la policía infiltrados, así como de los que participen en la ejecución de órdenes de aprehensión, detenciones en flagrancia y cateos relacionados con los delitos a que se refiere esta Ley, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta el tipo de investigación, imposibilitando que conste en la averiguación previa respectiva su nombre,

domicilio, así como cualquier otro dato o circunstancia que pudiera servir para la identificación de los mismos.

En tales casos, se asignará una clave numérica, que sólo será del conocimiento del Procurador General de Justicia, del Titular del órgano antes citado y del servidor público a quien se asigne la clave.

En las actuaciones de investigación del delito, en el ejercicio de la acción penal y durante el proceso penal, el Ministerio Público y la autoridad judicial citarán la clave numérica en lugar de los datos de identidad del agente. En todo caso, el Ministerio Público acreditará ante la autoridad judicial el acuerdo por el que se haya autorizado el otorgamiento de la clave numérica y que ésta corresponde al servidor público respectivo, preservando la confidencialidad de los datos de identidad del agente. En caso de que el agente de la policía cuya identidad se encuentre reservada tenga que intervenir personalmente en diligencias de desahogo de pruebas, se podrá emplear cualquier procedimiento que garantice la reserva de su identidad.

En las operaciones de los agentes de la policía infiltrados, éstos no podrán incitar a la comisión de delitos. El reglamento específico que será autorizado por el Procurador General de Justicia determinará los elementos que deberán ser controlados a cada uno de los agentes para garantizar su seguridad, así como el control de las actividades que realice, respetando los derechos de las personas relacionadas con su actividad, por lo que no podrá participar en actos violentos y tendrá la responsabilidad de impedir la ejecución de delitos contra la vida. El mismo reglamento fijará los estándares morales y éticos del comportamiento del agente infiltrado en el desarrollo de sus actividades.

En ningún caso se autorizará el uso de agentes infiltrados en la investigación de los delitos de secuestro.

Artículo 14.- En la investigación de los delitos previstos en la presente Ley, la unidad a que se refiere el artículo 9 podrá tener fuentes confidenciales que proporcionarán información que deberán ser protegidas en los términos del reglamento, que no estarán obligadas a comparecer, ni rendir declaración. La información que proporcionen deberá estar registrada en un expediente confidencial y el Ministerio Público y las policías podrán aprovecharlas legalmente. En ningún caso, los testimonios podrán ser presentados con carácter de anónimo en el proceso.

Existirá un fondo de apoyo financiero para fuentes confidenciales que será regulado en los términos del reglamento.

Artículo 15.- El Titular de la Unidad a la que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, promoverá que en las investigaciones de delincuencia organizada se procure obtener la colaboración de los miembros de la comunidad. Para lo cual se contará con un programa que permita la denuncia y colaboración de forma oportuna, eficaz y que establezca los mecanismos de

seguridad para los miembros de la comunidad que colaboren, así como de confidencialidad de su participación.

De las colaboraciones que brinden los miembros de la comunidad se llevará un registro, y solo podrán declarar o testificar en Juicio cuando aquellos así lo acepten. Toda la información que aporte la comunidad a través del programa a que se refiere este artículo será manejada con reserva, garantizada por el Ministerio Público a cargo de la investigación.

La información podrá ser aprovechada para preparar elementos de prueba que sean aportados en los procesos a que se refiere esta Ley.

Las denuncias o información proporcionada por integrantes de la comunidad deberán ser tratadas con criterio de estricta confidencialidad; el funcionario que no actúe conforme al criterio antes señalado será sancionado conforme al Código Penal del Estado de Zacatecas y las leyes que regulan la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos del Estado, dejando salvaguardado las acciones en la vía civil que correspondan a las personas que resulten afectadas por su conducta.

Artículo 16.- Las declaraciones o informaciones que reciba el Ministerio Público provenientes de la comunidad o testigos colaboradores deberán ser verificadas y valoradas en el contexto de los hechos que se investiguen, debiendo en todo momento procurar la obtención de pruebas materiales del hecho o hechos ilícitos denunciados.

CAPÍTULO SEGUNDO DE LA DETENCIÓN Y RETENCIÓN DE INDICIADOS

Artículo 17.- El Ministerio Público podrá decretar la duplicación del plazo de retención al imputado a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se requiera para obtener prueba en su contra, con motivo de las investigaciones, el cual no podrá exceder de las 96 horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial.

Artículo 18.- El Juez podrá dictar el arraigo, bajo control judicial en la instalación que para tal efecto destine el Poder Judicial, a solicitud del Ministerio Público, en los casos previstos en el artículo 2o. de esta Ley y con las modalidades de lugar, tiempo, forma y medios de realización señalados en la solicitud, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, para la protección de personas, de bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculcado se sustraiga a la acción de la justicia, sin que esta medida pueda exceder de cuarenta días y se realice con la vigilancia de la autoridad judicial.

Para que el Juez dicte el arraigo deberán existir imputaciones u otros indicios graves que determinen que la persona de que se trate participó en el hecho delictivo, que atenta contra las personas o que existe la posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia.

La duración del arraigo podrá prolongarse siempre y cuando el Ministerio Público acredite con nuevos elementos que subsisten las causas que le dieron origen, sin que la duración total de esta medida precautoria exceda de ochenta días.

El arraigo bajo supervisión judicial será desarrollado en un lugar con medidas de seguridad especiales y que será controlado por el Poder Judicial del Estado de Zacatecas, el que se auxiliará de la institución de seguridad pública para ello.

CAPÍTULO TERCERO DE LA RESERVA DE LAS ACTUACIONES DE INVESTIGACIÓN

Artículo 19.- A las actuaciones de investigación por los delitos a que se refiere esta Ley, exclusivamente deberán tener acceso el indiciado y su defensor, cuando el primero se encuentre detenido y cuando se pretenda recibírsele declaración o entrevistarle, únicamente con relación a los hechos imputados en su contra; por lo que el Ministerio Público y sus auxiliares guardarán la mayor reserva respecto de ellas, sin perjuicio de que el indiciado o su defensor, con base en la información recibida, puedan presentar las pruebas de descargo que juzguen oportunas. La víctima tendrá acceso a estas actuaciones, salvo aquellas que ponga en riesgo la investigación o seguridad de otras víctimas, testigos y personas a que se refiere el artículo 43 de esta Ley.

Las actuaciones que no hayan sido puestas en conocimiento del indiciado y su defensor cuando habiendo solicitado el acceso a las mismas, el Ministerio Público negara el acceso a estas, no podrán ser utilizadas para la acusación en su contra.

Artículo 20.- Cuando se presuma fundadamente que está en riesgo la integridad de las personas que rindan testimonio en contra de algún miembro de la delincuencia organizada deberá, a juicio del Ministerio Público, mantenerse bajo reserva su identidad hasta la acusación, sin embargo el contenido de la declaración será puesta a disposición del indiciado y su defensor.

CAPÍTULO CUARTO DE LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN QUE REQUIEREN CONTROL JUDICIAL

Artículo 21.- Cuando el Ministerio Público solicite por cualquier medio al juez de control una orden de cateo, aseguramiento, medidas cautelares u ordenes de aprehensión con motivo de la investigación de alguno de los delitos a los

que se refiere el presente ordenamiento, dicha petición deberá ser resuelta en los términos de Ley, programándose una audiencia dentro de las seis horas siguientes después de recibida la solicitud, en la que deberá resolver sobre ella; a dicha audiencia solo asistirá el Ministerio Público. El juez de Control resolverá las solicitudes del Ministerio Público garantizando los derechos del imputado y de la víctima u ofendido, deberá también considerar el principio de máxima eficacia de las medidas adoptadas para la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley.

Si dentro del plazo antes indicado, el juez no resuelve sobre el pedimento, el Ministerio Público podrá recurrir al tribunal superior correspondiente para que éste resuelva en un plazo igual, con las consideraciones también previstas en el párrafo anterior.

El auto que niegue la autorización, es apelable por el Ministerio Público. En estos casos la apelación deberá ser resuelta en un plazo no mayor de cuarenta y ocho horas.

Cuando el Juez competente, acuerde obsequiar una orden de aprehensión, deberá también acompañarla de una autorización de orden de cateo, si procediere, en el caso de que ésta haya sido solicitada por el agente del Ministerio Público, debiendo especificar el domicilio del probable responsable o aquél que se señale como el de su posible ubicación, o bien el del lugar que deba catearse por tener relación con el delito, así como los demás requisitos que señala el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 22.- Cuando en la investigación de alguno de los delitos previstos en las fracciones II, III, IV cuando la víctima sea niño, niña o adolescente, V y VII del artículo 2o de esta Ley o durante el proceso respectivo, el Procurador General de Justicia considere necesaria la intervención de comunicaciones privadas, lo solicitará por escrito al Juez Federal, conforme a los artículos 50 y 50 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en los términos y con las formalidades expresados en esos artículos.

Además de las formalidades previstas en los artículos antes referidos, las solicitudes de intervención deberán señalar, la persona o personas que serán investigadas; la identificación del lugar o lugares donde se realizará; el tipo de comunicación privada a ser intervenida; su duración; y el procedimiento y equipos para la intervención y, en su caso, la identificación de la persona a cuyo cargo está la prestación del servicio a través del cual se realiza la comunicación objeto de la intervención.

Podrán ser objeto de intervención las comunicaciones privadas que se realicen de forma oral, escrita, por signos, señales o mediante el empleo de aparatos eléctricos, electrónicos, mecánicos, alámbricos o inalámbricos, sistemas o

equipos informáticos, así como por cualquier otro medio o forma que permita la comunicación entre uno o varios emisores y uno o varios receptores.

Artículo 23.- En ningún caso el Procurador General de Justicia solicitará la autorización de intervenciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

Artículo 24.- Para solicitar la intervención el Procurador General de Justicia constatará la existencia de indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que la persona investigada pertenece a la delincuencia organizada y que la intervención es el medio idóneo para allegarse de elementos probatorios.

La intervención de las comunicaciones privadas será llevada a cabo por el Ministerio Público adscrito a la Unidad a que se refiere el artículo 9 de esta Ley, designado para tal efecto por el Procurador General de Justicia, bajo su responsabilidad, con la participación de perito calificado. Las comunicaciones y lugares autorizados por la autoridad judicial federal, serán intervenidos y vigilados durante el período otorgado por el Ministerio Público encomendado para tal efecto.

El Procurador General de Justicia podrá solicitar la prórroga de la interceptación en los términos del artículo 50 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sin que el período completo de interceptación, incluyendo sus prórrogas, exceda de los 6 meses.

Si existen nuevos elementos que así lo justifiquen, el Procurador General de Justicia podrá requerir una nueva prórroga de la intervención.

El Titular de la Unidad a la que se refiere el artículo 9º de la presente Ley, bajo su estricta responsabilidad, deberá verificar en cualquier momento que las intervenciones sean realizadas en los términos autorizados.

Al concluir toda intervención, el Procurador General de Justicia informará al Juez de Federal sobre su desarrollo, así como de sus resultados y adjuntará el acta respectiva formulada por el Ministerio Público a cargo de la intervención.

Las intervenciones realizadas sin las autorizaciones antes citadas o fuera de los términos en ellas ordenados, carecerán de valor probatorio.

Artículo 25.- En los casos en que el Juez Federal no resuelva las solicitud de intervención de comunicaciones en términos que para tal fin la ley en la materia a establecido, el Procurador General de Justicia podrá recurrir al tribunal unitario de circuito correspondiente.

El auto que niegue la autorización o la prórroga, es apelable por el Procurador General de Justicia.

Artículo 26.- Durante las intervenciones de las comunicaciones privadas, el Ministerio Público a cargo de la intervención efectuará la transcripción de aquellas grabaciones que resulten de interés para la investigación y las cotejará en presencia del personal del cuerpo técnico de control de la unidad especializada prevista en el artículo 9o. anterior, en cuyo caso serán ratificadas por quien las realizó. La transcripción contendrá los datos necesarios para identificar los registros digitales o las cintas de voz o vídeo de donde fue tomada. Los datos o informes impresos que resulten de la intervención serán igualmente integrados a la investigación.

Las imágenes de video que se estimen convenientes podrán, en su caso, ser convertidas a imágenes fijas y ser impresas para su integración a la investigación. En este caso, se indicará los registros de videos digitales o las cintas de donde proviene la imagen y el nombre y cargo de la persona que realizó la conversión.

Artículo 27.- Si en la práctica de una intervención de comunicaciones privadas se tuviera conocimiento de la comisión de delitos diversos de aquéllos que motivan la medida, se hará constar esta circunstancia en el acta correspondiente y se actuará en lo conducente, con excepción de los relacionados con las materias expresamente excluidas en el artículo 16 constitucional. Toda actuación del Ministerio Público o de la Policía Ministerial o de otras policías, hechas en contravención a esta disposición carecerán de valor probatorio.

Cuando de la misma práctica se advierta la necesidad de ampliar a otros sujetos o lugares la intervención, el Procurador General de Justicia presentará al Juez Federal la solicitud respectiva.

Cuando la intervención tenga como resultado el conocimiento de hechos y datos distintos de los que pretendan probarse conforme a la autorización correspondiente podrá ser utilizado como medio de prueba, siempre que se refieran al propio sujeto de la intervención y se trate de alguno de los delitos referidos en el artículo 2º anterior. Si se refieren a una persona distinta sólo podrán utilizarse, en su caso, en el procedimiento en que se autorizó dicha intervención. De lo contrario, el Ministerio Público iniciará la investigación o lo pondrá en conocimiento de las autoridades competentes, según corresponda.

Artículo 28.- De toda intervención se levantará acta circunstanciada por el Ministerio Público, que contendrá las fechas de inicio y término de la intervención; un inventario pormenorizado de los documentos, objetos y los registros digitales o cintas de audio o video que contengan los sonidos o imágenes captadas durante la misma; la identificación de quienes hayan participado en las diligencias, así como los demás datos que considere relevantes para la investigación. Los registros digitales o las cintas originales y el duplicado de cada una de ellas, se numerarán progresivamente y contendrán

los datos necesarios para su identificación. Se guardarán en sobre sellado y el Ministerio Público será responsable de su seguridad, cuidado e integridad.

Artículo 29.- Al iniciarse el proceso, los registros digitales o las cintas de voz o vídeo, así como todas las copias existentes y cualquier otro resultado de la intervención serán entregados al juez.

Durante el proceso, el juez, pondrá los registros digitales o las cintas de voz o vídeo a disposición del inculpado, quien podrá escucharlos o verlos durante un periodo de diez días, bajo la supervisión de la autoridad judicial, quien velará por la integridad de estos elementos probatorios. Al término de este periodo de diez días, el inculpado o su defensor, formularán sus observaciones, si las tuvieran, y podrán solicitar al Juez la destrucción de aquellos registros digitales, cintas o documentos que considere no relevantes para el proceso, lo que deberá ser tenido en cuenta por el Juez al momento de resolver sobre la conservación o destrucción de los registros digitales, cita o documentos relacionados con el proceso. Asimismo, podrá solicitar la transcripción de aquellas grabaciones o la fijación en impreso de imágenes, que considere relevantes para su defensa.

La destrucción también será procedente cuando los registros digitales, las cintas o registros provengan de una intervención no autorizada o no se hubieran cumplido los términos de la autorización judicial respectiva.

El auto que resuelva la destrucción de los registros digitales o cintas, la transcripción de grabaciones o la fijación de imágenes, es apelable con efecto suspensivo.

Artículo 30.- En caso de no ejercicio de la acción penal, y una vez transcurrido el plazo legal para impugnarlo sin que ello suceda, los registros de voz digitales o las cintas se pondrán a disposición del juez, quien ordenará su destrucción en presencia del Ministerio Público. Igual procedimiento se aplicará cuando, por reserva de la investigación u otra circunstancia, dicha averiguación no hubiera sido consignada y haya transcurrido el plazo para la prescripción de la acción penal.

Artículo 31.- Los concesionarios, permisionarios y demás titulares de los medios o sistemas susceptibles de intervención en los términos del presente capítulo, deberán colaborar eficientemente con la autoridad competente para el desahogo de dichas diligencias, de conformidad con la normatividad aplicable y la orden judicial correspondiente.

En los casos en que los concesionarios, permisionarios y demás titulares de los medios o sistemas susceptibles de intervención falten a la colaboración eficiente para el desahogo de las diligencias correspondientes, señalado en el párrafo anterior, el Ministerio Público encargado de realizar la intervención de comunicación deberá notificar al Juez Federal del incumplimiento.

Artículo 32.- Los servidores públicos de la unidad especializada a que se refiere el artículo 9o. de esta Ley, así como cualquier otro servidor público, que intervengan comunicaciones privadas sin la autorización judicial correspondiente, o que la realicen en términos distintos de los autorizados, serán sancionados con prisión de seis a doce años, de quinientos a mil días multa, así como con destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, por el mismo plazo de la pena de prisión impuesta.

Artículo 33.- Quienes participen en alguna intervención de comunicaciones privadas deberán guardar reserva sobre el contenido de las mismas.

Los servidores públicos de la unidad especializada prevista en el artículo 9o. de esta Ley, así como cualquier otro servidor público o los servidores públicos del Poder Judicial, que participen en algún proceso de los delitos a que se refiere esta Ley, que revelen, divulguen o utilicen en forma indebida o en perjuicio de otro la información o imágenes obtenidas en el curso de una intervención de comunicaciones privadas, autorizada o no, serán sancionados con prisión de seis a doce años, de quinientos a mil días multa, así como con la destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, por el mismo plazo que la pena de prisión impuesta.

La misma pena se impondrá a quienes con motivo de su empleo, cargo o comisión público tengan conocimiento de la existencia de una solicitud o autorización de intervención de comunicaciones privadas y revelen su existencia o contenido.

Artículo 34.- Los particulares podrán aportar de forma voluntaria a la investigación o proceso las comunicaciones privadas en las que participen. El Juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión del delito que se investiga o el proceso que se sigue.

En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad entre los intervinientes.

Será procedente la intervención de comunicaciones cuando, en la misma, uno de los participantes tenga conocimiento y exprese su voluntad para que a instancias del Ministerio Público sea intervenida, con el fin de perseguir los delitos señalados en el artículo 2º de la presente Ley. En el caso de que el particular interviniente en la comunicación incite al delito, la intervención carecerá de todo valor probatorio y será declarada nula, lo anterior con independencia de las consecuencias administrativas y penales a que de lugar, para aquellas personas o funcionarios que participaron.

CAPÍTULO QUINTO

DEL ASEGURAMIENTO Y DE BIENES SUSCEPTIBLES DE DECOMISO

Artículo 35.- El Ministerio Público durante la investigación deberá asegurar todos aquellos bienes susceptibles de decomiso por parte de la autoridad judicial en el proceso correspondiente, entre los que se encuentren:

- I. El producto del o los delitos comprendidos en la presente ley o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto, cuando existan elementos para considerar que el o los hechos ilícitos sucedieron;
- II. Los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en la comisión de los delitos comprendidos en la presente Ley;
- III. Cuando el producto del delito se haya transformado o convertido parcial o totalmente en otros bienes, esos bienes podrán ser objeto de las medidas aplicables a dicho producto al tenor del presente artículo;
- IV. Cuando el producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas, esos bienes podrán, ser objeto de aseguramiento para posteriormente ser decomisados, y
- V. Los ingresos u otros beneficios derivados del producto del delito, de bienes en los que se haya transformado o convertido el producto del delito o de bienes con los que se haya entremezclado el producto del delito también podrán ser objeto de las medidas previstas en el presente artículo, de la misma manera y en el mismo grado que el producto del delito.

Artículo 36.- Cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que una persona pertenece a la delincuencia organizada, el Ministerio Público, de oficio, solicitará al Juez de Control el aseguramiento de los bienes de dicha persona; así como de aquéllos respecto de los cuales ésta se conduzca como dueño, quedando a cargo de sus tenedores acreditar la procedencia legítima de dichos bienes.

En el caso de que el propietario o poseedor acredite su legítima procedencia, y no se esté en ninguno de los supuestos del artículo anterior, el Juez de Control deberá levantar el aseguramiento.

Artículo 37.- El aseguramiento de bienes a que se refiere este capítulo, podrá realizarse en cualquier momento de la investigación o del proceso, y aun en la fase de ejecución de sentencia.

El Ministerio Público deberá demandar la extinción de dominio sobre los bienes asegurados, conforme a la normatividad aplicable cuando esos bienes sean susceptibles de dicha acción.

Artículo 38.- Los bienes asegurados se pondrán a disposición del Juez de la causa, previa determinación del Ministerio Público de las medidas provisionales necesarias para su conservación y resguardo, que haya dictado el Juez de Control.

El Juez de la causa, durante el proceso, tomará las determinaciones que correspondan para la supervisión y control de los bienes asegurados conforme a las disposiciones de esta Ley.

Artículo 39.- Los bienes decomisados en los procesos seguidos por los delitos previstos en esta Ley serán destinados para:

- I. La reparación del daño de la víctima u ofendido;
- II. Apoyo a organizaciones no gubernamentales dedicadas a la prevención social del delito, atención de adicciones y atención de niños, niñas, adolescentes y personas pertenecientes a grupos en riesgo de integrarse a pandillas o a grupos de delincuencia organizada;
- III. Generación de programas especializados con las instituciones educativas que promuevan los valores familiares, éticos y cívicos, y
- IV. Rehabilitación de espacios públicos destinados a la recreación, la cultura o al deporte.

CAPÍTULO SEXTO DE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS

Artículo 40.- El Gobierno del Estado de Zacatecas deberá contar con una Unidad de Protección de Personas que prestará apoyo y protección suficientes a jueces, peritos, testigos, víctimas y demás personas, cuando por su intervención en un procedimiento penal sobre delitos a que se refiere esta Ley, así se requiera.

Artículo 41.- Para proteger de manera eficaz contra eventuales actos de represalia, intimidación o amenaza a las personas señaladas en el artículo anterior, y en particular a aquellas que presten testimonio sobre delitos comprendidos en la presente Ley, así como, cuando proceda, a sus familiares y demás personas cercanas, la Unidad de Protección de Personas deberá establecer procedimientos para la protección física de esas personas, incluida, en la medida de lo necesario y lo posible, su reubicación, y permitir, cuando proceda, la prohibición total o parcial de revelar información relativa a su identidad y paradero.

Artículo 42.- La Unidad de Protección de Personas tendrá el carácter de institución policial, en términos de la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que sus integrantes deberán contar la debida certificación y acreditación en términos de la Ley antes referida.

El reglamento de la Unidad deberá establecer el perfil y características de sus integrantes, así como su organización administrativa.

CAPÍTULO SÉPTIMO DE LA COLABORACIÓN EN LA PERSECUCIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Artículo 43.- El miembro de la delincuencia organizada que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de otros miembros de la misma, podrá recibir los beneficios siguientes:

- I. Cuando no exista investigación en su contra, los elementos de prueba que aporte o se deriven de la averiguación previa iniciada por su colaboración, no serán tomados en cuenta en su contra. Este beneficio sólo podrá otorgarse en una ocasión respecto de la misma persona;
- II. Cuando exista una investigación en la que el colaborador esté implicado y éste aporte indicios para la consignación de otros miembros de la delincuencia organizada, la pena que le correspondería por los delitos por él cometidos, podrá ser reducida hasta en dos terceras partes;
- III. Cuando durante el proceso penal, el indiciado aporte pruebas ciertas, suficientes para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administración, dirección o supervisión, la pena que le correspondería por los delitos por los que se le juzga, podrá reducirse hasta en una mitad, y
- IV. Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas, suficientemente valoradas por el juez, para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administración, dirección o supervisión, podrá otorgársele la remisión parcial de la pena, hasta en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta.

En la imposición de las penas, así como en el otorgamiento de los beneficios a que se refiere este artículo, el juez tomará en cuenta la gravedad de los delitos cometidos por el colaborador. En los casos de la fracción IV de este artículo, la autoridad competente tomará en cuenta la gravedad de los delitos cometidos por el colaborador y las disposiciones que establezca la legislación sobre ejecución de penas y medidas de seguridad.

El Ministerio Público deberá corroborar las declaraciones del testigo colaborante en los términos del artículo 41 de la presente Ley.

Artículo 44.- En caso de que existan pruebas distintas a la autoinculpación en contra de quien colabore con el Ministerio Público, a solicitud de éste se le podrán reducir las penas que le corresponderían hasta en tres quintas partes, siempre y cuando, a criterio del juez, la información que suministre se encuentre corroborada por otros indicios de prueba y sea relevante para la detención y procesamiento de otros miembros de la delincuencia organizada de mayor peligrosidad o jerarquía que el colaborador.

Artículo 45.- Cuando se gire orden de aprehensión en contra de un miembro de la delincuencia organizada, la autoridad podrá ofrecer recompensa a quienes auxilien eficientemente para su localización y aprehensión, en los términos y condiciones que, por acuerdo específico, el Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas determine.

En el caso de secuestro, la autoridad podrá ofrecer recompensa a quienes sin haber participado en el delito, auxilien con cualquier información que resulte cierta y eficaz para la liberación de las víctimas o la aprehensión de los presuntos responsables. La autoridad garantizará la confidencialidad del informante.

Las recompensas a que se refiere el presente artículo serán entregadas a través de procedimientos que garanticen confidencialidad y seguridad para el beneficiario; por lo que se deberá tener en cuenta el mecanismo de pago, su introducción al patrimonio y su relación con el sistema financiero.

Artículo 46.- En caso de que se reciban informaciones anónimas sobre hechos relacionados con la comisión de los delitos a que se refiere esta Ley, el Ministerio Público deberá ordenar que se verifiquen estos hechos. En caso de verificarse la información y que de ello se deriven indicios suficientes de la comisión de estos delitos, se deberá iniciar una investigación, recabar pruebas o interrogar a testigos a partir de esta comprobación.

Para el ejercicio de la acción penal, se requerirá necesariamente de la denuncia, acusación o querrela correspondiente.

Artículo 47.- Toda persona en cuyo poder se hallen objetos o documentos que puedan servir de pruebas tiene la obligación de exhibirlos, cuando para ello sea requerido por el Ministerio Público durante la investigación, o por el juzgador durante el proceso, con las salvedades que establezcan las leyes; en caso contrario será sancionado de conformidad con el delito de encubrimiento, previsto en el artículo 258 del Código Penal para el Estado de Zacatecas.

TÍTULO TERCERO DE LOS JUECES ESPECIALIZADOS EN DELINCUENCIA ORGANIZADA

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 48.- El Poder Judicial del Estado de Zacatecas contará con jueces especializados en delincuencia organizada, los que tendrán a su cargo el otorgamiento de las medidas cautelares y demás autorizaciones judiciales a que se refiere la presente Ley, así como la substanciación de los procesos y sus consecuencias contra personas pertenecientes a organizaciones delictivas por los delitos señalados en el artículo 2º anterior.

**TÍTULO CUARTO
DE LAS REGLAS ESPECIALES PARA EL PROCESO, PRUEBA
ANTICIPADA Y
VALORACIÓN DE PRUEBA**

**CAPÍTULO PRIMERO
LA PRUEBA ANTICIPADA**

Artículo 49.- Se podrá recabar prueba anticipada, además de los supuestos considerados en el Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas, en los siguientes supuestos:

- I. Cuando exista un riesgo de vida para los testigos o víctimas de los procesos a lo que se refiere la presente Ley o hayan sido amenazados;
- II. Cuando la víctima o el testigo tenga residencia en otra entidad federativa o en el extranjero;
- III. Cuando el testigo este en proceso de extradición;

En este caso el Ministerio Público presentará ante el Juez de Control a la persona que va a declarar, o al perito que desarrollará la prueba científica y el Juez de Control llamará a un Defensor Público para que salvaguarde los derechos de la persona investigada.

En caso de que el testigo o perito fallezca, lo declarado será valorado por el Juez de la causa aplicando las reglas de la valoración de la prueba, pero considerando las circunstancias de la muerte del testigo o perito.

**CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS REGLAS ESPECIALES PARA EL PROCESO Y VALORACIÓN DE
LA PRUEBA**

Artículo 50.- El Poder Judicial en colaboración con la Procuraduría General de Justicia y la Unidad de Protección de Personas, establecerán y utilizarán mecanismos que permitan que el testimonio de los testigos o víctimas se preste de modo que no se ponga en peligro su seguridad, aceptando el testimonio por conducto de tecnologías de comunicación como videoconferencia u otros medios adecuados.

Artículo 51.- El Juez de la causa establecerá mecanismos adecuados que permitan a las víctimas de los delitos comprendidos en la presente Ley obtener indemnización y restitución de sus derechos, de conformidad con el Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas.

Así también el Juez escuchará y examinará las opiniones y preocupaciones de las víctimas durante el desarrollo del proceso, sin que ello menoscabe el derecho de defensa del procesado.

Artículo 52.- Para efectos de la comprobación de los elementos del tipo penal y la responsabilidad del inculpado, el juez valorará prudentemente la imputación que hagan los diversos participantes en el hecho y demás personas involucradas.

Cuando una persona reciba beneficios por su colaboración eficaz esta circunstancia deberá ser hecha del conocimiento del Juez de la causa. Las declaraciones deberán ser preferentemente vertidas en la audiencia, salvo que se trate de prueba anticipada.

Si el testigo falleció como consecuencia de actos relacionados con la obstrucción de justicia, sus declaraciones deberán ser valoradas preferentemente, bajo las reglas de valoración de la lógica y la experiencia.

Artículo 53.- Cuando la prueba sea obtenida como producto de imputaciones realizadas por miembros de delincuencia organizada que colaboren en los términos del artículo 43 de la presente Ley, el Juez deberá valorar estas declaraciones conforme a las siguientes reglas:

I. Cuando un testigo que recibe beneficios sea aportado como prueba en un proceso y haya declarado ante el Ministerio Público sobre hechos materia del Juicio, el Ministerio Público deberá aportar previamente un cuadernillo con todas las declaraciones relevantes que se refieran a los hechos ilícitos relacionados, así como una valoración general del Ministerio Público de la credibilidad del testigo colaborante, en otros procesos penales, si es que los hubiere;

II. Las partes podrán interrogar al testigo no solo sobre lo que declara en la audiencia, sino sobre las declaraciones discordantes que haya realizado. El Juez valorará esta circunstancia, así como la consideración de que puede tratarse de hechos muy extendidos en el tiempo;

III. El Juez deberá valorar la coherencia interna de las declaraciones vertidas en la audiencia y las contradicciones que las partes hagan evidentes, aun cuando hayan sido hechas en otros procesos, así como todos los otros elementos que tienen que ver con la credibilidad del testigo;

IV. También deberá valorar y motivar en su sentencia cuales son los elementos de coherencia externa entre los dichos del testigo colaborante y los elementos materiales que fueron recabados en la investigación;

V. Las declaraciones de oídas solo podrán ser utilizadas para el contexto, pero el Juez no podrá otorgarles valor probatorio;

VI. El Juez deberá valorar la coherencia externa de los testimonios con las evidencias materiales de que el hecho ilícito sucedió y que el o los procesados participaron en su comisión. Se entiende por evidencia material la prueba física que tiene que ver con el hecho ilícito y el modo, tiempo, lugar y circunstancia de la realización del hecho ilícito;

En ningún caso serán suficientes las meras declaraciones de testigos colaboradores para acreditar la responsabilidad del procesado, las cuales deberán ser relacionadas y valoradas con otros elementos probatorios que las confirmen.

Artículo 54.- Los jueces y tribunales, apreciarán el valor de los indicios hasta poder considerar su conjunto como prueba plena, según la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el enlace que exista entre la verdad conocida y la que se busca.

Las pruebas admitidas en un proceso podrán ser utilizadas por la autoridad investigadora para la persecución de la delincuencia organizada y ser valoradas como tales en otros procedimientos relacionados con los delitos a que se refiere esta Ley.

La sentencia judicial irrevocable que tenga por acreditada la existencia de una organización delictiva determinada, será prueba plena con respecto de la existencia de esta organización en cualquier otro procedimiento por lo que únicamente sería necesario probar la vinculación de un nuevo procesado a esta organización, para poder ser sentenciado por el delito de delincuencia organizada.

TÍTULO QUINTO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA Y EJECUCIÓN DE LAS PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 55.- La reclusión preventiva y la ejecución de las sentencias de los integrantes de la delincuencia organizada se llevará a cabo en centros especiales.

Se podrán restringir las comunicaciones de los inculpados o sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos.

La autoridad deberá mantener reclusos a los procesados o sentenciados que colaboren en la persecución y procesamiento de otros miembros de la delincuencia organizada, en establecimientos distintos de aquéllos en que

estos últimos estén reclusos, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de sentencia.

Artículo 56.- Los sentenciados por los delitos a que se refiere la presente Ley no tendrán derecho a los beneficios de la libertad preparatoria o de la condena condicional, salvo que se trate de quienes colaboren con la autoridad en la investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada.

Artículo 57.- La misma regla se aplicará en relación al tratamiento preliberacional y la remisión parcial de la pena a que se refiere la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Restrictivas de la Libertad.

Artículo 58.- Los sentenciados por los delitos a que se refiere esta ley no tendrán el derecho de compurgar sus penas en el centro penitenciario más cercano a su domicilio.

La Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Restrictivas de la Libertad preverá la definición de los centros especiales para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias, la restricción de comunicaciones de los inculcados y sentenciados y la imposición de medidas de vigilancia especial a los internos por delincuencia organizada.

TÍTULO SEXTO

DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 59.- La responsabilidad civil derivada de la comisión de los delitos de delincuencia organizada se funda en los artículos 1194 al 1219 del Código Civil para el Estado de Zacatecas, es de la organización en su conjunto, tiene naturaleza objetiva y se genera por el riesgo social producido por la delincuencia organizada.

Toda víctima directa, indirecta o comunidad afectada en los términos de esta ley tiene derecho a participar en el proceso penal, tanto para la acreditación del hecho acusado como en los procedimientos para el establecimiento de la responsabilidad civil de las organizaciones.

Artículo 60.- Para los efectos de este Título se entenderá por:

I. Víctimas, a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido lesiones físicas o psíquicas, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo en sus derechos fundamentales, como consecuencia de la comisión de los delitos a que se refiere esta Ley.

II. Víctimas indirectas, a los familiares de la víctima y/o personas que tengan o hayan tenido relación o convivencia con la misma y que sufran, hayan sufrido o se encuentren en situación de riesgo de sufrir algún daño por motivo de la comisión de los delitos a que se refiere esta Ley.

También tendrán este carácter las comunidades cuyos intereses difusos hayan sido afectados por la criminalidad organizada, que serán representadas por el gobierno Estatal y los gobiernos municipales o las organizaciones civiles que los ciudadanos hayan constituido para defender sus intereses.

III. Daños y perjuicios, los definidos en el artículo 1437, 1438 y demás correlativos del Código Civil para el Estado de Zacatecas, que podrán ser de las víctimas directas, de las indirectas o los causados a la comunidad.

IV. Reparación del daño, resarcir el menoscabo que las víctimas hayan sufrido en su persona, en su patrimonio o en sus derechos fundamentales, derivados de la comisión de los delitos a que se refiere esta Ley. La reparación del daño comprende:

a) La restitución de la cosa obtenida por el delito y si no fuere posible, el pago del precio de la misma;

b) La indemnización del daño material y moral causado, incluyendo el pago de los tratamientos médicos, curativos o psicoterapéuticos que, como consecuencia del delito, sean necesarios para la recuperación de la salud de la víctima o víctima indirecta, y

c) El resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

V. Obligación de reparar, la responsabilidad civil genera obligación solidaria al sentenciado y a la organización de reparar los daños causados a cargo de su patrimonio o posesiones independientemente de su origen.

VI. La reparación del daño social comprende:

A. El pago del daño causado en la región o lugares en donde operó el grupo de delincuencia organizada, por su mera operación e independientemente de que se puedan atribuir directamente a él los daños causados a:

a) La propiedad pública, debidos a las acciones delictivas de la organización;

b) La propiedad privada que no sean directamente reclamados por sus legítimos propietarios;

c) Los pagos ilícitos realizados por la víctimas cuando no sean reclamados por éstas;

- d) Los gastos e inversiones necesarias para el mejoramiento de la seguridad pública, como consecuencia de las actividades de la organización;
- e) Los gastos de la seguridad privada que son consecuencia de la actividad de la organización cuando no sean reclamados por sus legítimos propietarios;
- f) La rehabilitación de los adictos, cuando la organización realiza delitos contra la salud;
- g) Los gastos en servicios médicos derivados de la violencia de las organizaciones;
- h) Las indemnizaciones a los familiares, las incapacidades y otras prestaciones que el Municipio o Estado deba asumir como consecuencia de la actuación de la organización, o que deban ser pagados por quien sufre el daño,
- i) La afectación a las actividades económicas producto del ambiente de inseguridad creado por las organizaciones delictivas, y
- j) Los perjuicios económicos que ese daño causó a la comunidad en su conjunto.

Artículo 61. En la sentencia que declare la responsabilidad penal por la comisión de los delitos a que se refiere esta Ley, se declarará obligatoriamente la Responsabilidad Civil por Delincuencia Organizada.

Para lo cual se tramitará este procedimiento ante los Juzgados de Extinción de Dominio competentes para el Estado de Zacatecas. Las constancias de autos en que esté acreditada la víctima y su daño, servirán para determinar los montos.

Artículo 62. Para la cuantificación de los montos que no están acreditados se seguirá el siguiente procedimiento:

I. Se abrirá un procedimiento especial para realizar la cuantificación de la reparación del daño causado a las víctimas directas o indirectas del delito y de la responsabilidad civil del sentenciado hacia la comunidad.

II. El juez citará de oficio a las víctimas que se encuentren acreditadas en el juicio. Las demás serán convocadas por edictos.

III. El Juez requerirá de oficio al gobierno Estatal y a los gobiernos municipales y a las Organizaciones Sociales afectadas, para que se presenten a determinar el daño social causado y el monto de la reparación que deberá ser establecido como responsabilidad civil.

IV. Todas las partes, incluyendo a las Organizaciones Sociales podrán alegar y presentar pruebas del daño social causado.

V. Una vez citadas las partes y valoradas las pruebas, el juez determinará en audiencia, la cual deberá ser celebrada en un término de 30 días para determinar la responsabilidad civil.

VI. En la audiencia el juez determinará primero los daños y perjuicios a las víctimas individuales, sean directas o indirectas cuando se apersonen a reclamar.

VII. El Juez asignará hasta un quince por ciento del monto de la responsabilidad civil asignado a la comunidad para las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección de los intereses comunitarios. El resto será repartido en proporción al daño causado a los Municipios y el Estado.

VIII. En el procedimiento serán supletorios el Códigos Civil para el Estado de Zacatecas y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, así como, para la realización de la audiencia, el Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas.

Artículo 63. La prescripción de la acción penal para reparar el daño prescribirá de acuerdo a las reglas para la prescripción de la acción penal referente a delitos de delincuencia organizada.

Artículo 64.- Una vez dictada la sentencia penal correspondiente por la comisión de delitos de delincuencia organizada y establecida la responsabilidad civil por daños por delitos de delincuencia organizada, el crédito por la reparación del daño prescribirá a los 30 años de declararse firme la sentencia.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la denominación del Título Vigésimo y del Capítulo Único del mismo Título y se adiciona el Capítulo Segundo del mismo Título y el Artículo 362 Bis del Código Penal para el estado de Zacatecas, para quedar como sigue:

TÍTULO VIGÉSIMO
DEL ENCUBRIMIENTO Y LA OPERACIÓN CON RECURSOS DE
PROCEDENCIA ILÍCITA.

CAPÍTULO PRIMERO
ENCUBRIMIENTO

CAPÍTULO SEGUNDO
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.

Artículo 362 Bis. Al que por sí o por interpósita persona adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza que procedan o representen el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita, se le impondrán de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa.

Las penas previstas en el párrafo anterior serán aumentadas en una mitad cuando el delito se cometa por servidores públicos; además, se impondrá a dichos servidores públicos, destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma la fracción V del artículo 4, las fracciones XXXIV y XXXV del artículo 11, fracciones I, II y IV del artículo 19 y se adiciona la fracción XXXVI del artículo 11 y el artículo 37 Bis, todos del Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, para quedar como sigue:

Artículo 4. Integración

El Poder Judicial del Estado de Zacatecas se ejerce por:

I. ...

IV. ...

V. Los Juzgados de Primera Instancia, que podrán ser Civiles, Penales, de Delincuencia Organizada, Familiares Mixtos de Garantías, de Juicio Oral para Adultos, Especializados para Adolescentes y de Ejecución de Sanciones; y

VI. ...

Artículo 11. Atribuciones.

Corresponde al Tribunal Superior de Justicia en Pleno:

I. ...

XXXIII. ...

XXXIV. Vigilar la observancia de la Ley de Profesiones del Estado, en lo que concierne al ejercicio de la abogacía;

XXXV. Establecer, supervisar y vigilar el funcionamiento de los centros de arraigo bajo control judicial, y

XXXVI. Las demás que esta ley, su reglamento interior y otros ordenamientos le señalen.

Artículo 19. Competencias de las Salas Penales

Las Salas Penales conocerán:

I. De los recursos de apelación y denegada apelación que se interpongan contra las resoluciones dictadas por los jueces de Primera Instancia y Municipales en materia penal y especializados en delincuencia organizada, así como en las que emitan en los incidentes de responsabilidad civil que surjan en el procedimiento;

II. ...

III. De los impedimentos, excusas y recusaciones de los jueces de Primera Instancia y Municipales en asuntos del ramo penal y de delincuencia organizada;

IV. De los conflictos de competencia que surja entre los jueces de Primera Instancia, los jueces Municipales o entre éstos y aquéllos, así como entre los jueces en materia penal y especializados en delincuencia organizada;

V. ...

VI. ...

Artículo 37 Bis. Competencia de los Jueces especializados de Primera Instancia en materia de delincuencia organizada:

Los jueces especializados en delincuencia organizada conocerán de los asuntos que por materia les corresponda de conformidad con el Código Penal, Código de Procedimientos Penales y Ley Contra la Delincuencia Organizada para el Estado de Zacatecas, y de aquellos que por jurisdicción auxiliar les confieran otras leyes.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para los efectos del artículo 8 del ordenamiento Ley

Contra la Delincuencia Organizada, se aplicará supletoriamente el Código de Procedimientos Penales en los tiempos y formas señalados en el Artículo Primero Transitorio del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas.

ARTÍCULO TERCERO.- El Gobernador del Estado de Zacatecas, dentro de los 180 días naturales posteriores a la publicación del presente decreto, deberá realizar las adecuaciones jurídico-administrativas necesarias para el establecimiento de la Unidad de Investigación Patrimonial de la Delincuencia Organizada y la Unidad de Protección de Personas, así como la expedición de sus reglamentos para su adecuado funcionamiento.

ARTÍCULO CUARTO.- El Procurador General de Justicia dentro de los 180 días naturales posteriores a la publicación del presente decreto, deberá realizar las adecuaciones jurídico-administrativas necesarias para el establecimiento de la Unidad Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada.

ARTÍCULO QUINTO.- El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas cuenta con 60 días naturales posteriores a la publicación del presente decreto para realizar las adecuaciones jurídico-administrativas necesarias para el establecimiento de los centros de arraigo bajo control judicial, para lo cual el Gobernador del Estado proporcionará la asistencia que resulte necesaria.

Para la expedición de los manuales de funcionamiento de los centros de arraigo bajo control judicial, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado cuenta con 90 días naturales posteriores a la publicación del presente decreto.

ARTÍCULO SEXTO.- El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas realizará la reasignación de la materia del conocimiento de cualquiera de los Juzgados que lo integran y que sean necesarios para contar con los Juzgados Especializados en Delincuencia Organizada para substanciar los procedimientos en esta materia.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- En tanto el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas realiza las adecuaciones jurídico- administrativas para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo anterior, conocerán de los procesos en delincuencia organizada los juzgados de Primera Instancia Penal con sede en la capital del Estado.

ARTÍCULO OCTAVO.- La Legislatura del Estado de Zacatecas deberá destinar los recursos económicos suficientes dentro del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011 para que los Poderes Ejecutivo y Judicial estén en condiciones de dar cumplimiento a los fines del presente ordenamiento, así como para el establecimiento del fondo a que se refiere el artículo 14 del mismo ordenamiento.

ARTÍCULO NOVENO.- Las reformas al Sistema Penitenciario las realizará el

Ejecutivo Estatal, en los términos del Artículo Quinto Transitorio de la reforma constitucional publicada el día 18 de Junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan este Decreto.

Zacatecas, Zac. a trece de septiembre del dos mil diez.